

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA N° 37/2003

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los **29 días del mes de mayo del año dos mil tres**, reunidos en acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y

CONSIDERANDO:

Que el día 13 de mayo de 2003 se suscribió el Convenio entre el Poder Judicial de la Provincia, representado por el Dr. Víctor Hugo Soderó Nievas en su calidad de Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación representado por el Sr. Ministro D. Alfredo N. Atanasof.

Que el presente Convenio en su cláusula cuarta establece que el mismo será ratificado por Acordada del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, correspondiendo en consecuencia proceder a su ratificación.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE LA JUSTICIA

RESUELVE:

1º) Ratificar el convenio suscripto entre el Poder Judicial de la Provincia, representado por el Dr. Víctor Hugo Soderó Nievas en su calidad de Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación representado por el Sr. Ministro D. Alfredo N. Atanasof, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

2º) Regístrese, notifíquese, tómesese razón y oportunamente archívese.

FIRMADO:

**LUTZ - Presidente STJ - BALLADINI – Juez STJ - SODERO NIEVAS – Juez - STJ.
Latorre - Secretaria Superintendencia STJ.**

ANEXO I
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

PROTOCOLO
PROGRAMA CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO PARA EL
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes Mayo de 2003, se reúnen por una parte, el Sr. JEFE DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN D. ALFREDO N. ATANASOF, en adelante "LA UNIDAD DE COOPERACIÓN" y por la otra el Dr. VICTOR HUGO SODERO NIEVAS, en calidad de Vicepresidente del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, en adelante "el S.T.J."; y acuerdan suscribir el presente "PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO", en concordancia con el acta convenio oportunamente firmada en Puerto Madryn (CH) el 8 de noviembre de 2002 entre la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el "FORO PATAGÓNICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA" (que integra el presente en carácter de ANEXO "A"), a los efectos de instrumentar EL PROGRAMA CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO (Decreto N° 229/00), en el marco de la "CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE LA PATAGONIA ARGENTINA ANTE LA JUSTICIA" (que se agrega como ANEXO "B"), en adelante EL PROGRAMA, de acuerdo a las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La incorporación del PODER JUDICIAL DE RÍO NEGRO al PROGRAMA CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO implica su voluntad de iniciar y profundizar un proceso permanente de mejora continúa en la prestación de los servicios a su cargo, definido como una política sustantiva de Modernización del Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL S.T.J afectará a la implantación de EL PROGRAMA en carácter de Responsable con capacidad de decisión que cumplirá la función de coordinadora de EL PROGRAMA en el mismo, a la Magistrada Secretaria de Superintendencia del S.T.J., Dra. STELLA MARIS LATORRE, sin perjuicio de las funciones del Sr. Juez del S.T.J. Dr. VICTOR HUGO SODERO NIEVAS, en carácter de Miembro titular del "COMITÉ DEL PROGRAMA" del acta convenio del 8 de noviembre de 2002. (Acordada Nro. 103/02 del S.T.J.); y la coordinación del DR. MARCOS LUIS BOTBOL, representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el "COMITÉ DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL SECTOR JUSTICIA DE LA REGIÓN PATAGONIA", en mérito de la Resolución 281 (JGM) de fecha 17 de diciembre del 2002 (que se incorpora como ANEXO "C").

CLÁUSULA TERCERA: LA UNIDAD DE COOPERACIÓN capacitará a los responsables de la ejecución del Programa y a facilitadores que designe el S.T.J. Dicha capacitación se iniciará en el mes de junio del presente año y tendrá una duración total de treinta (30) horas cátedra.

CLÁUSULA CUARTA: Durante el curso de capacitación, mencionado en la cláusula precedente, la Responsable y los facilitadores designados por el S.T.J., con la colaboración de los capacitadores propuestos asignados por la UNIDAD DE COOPERACIÓN elaborarán una propuesta del Plan de Implantación de EL PROGRAMA, el cual deberá ser ratificado por Acordada del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, y por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, como condición previa a su puesta en práctica.

CLÁUSULA QUINTA: A partir de la implementación y capacitación, la UNIDAD DE COOPERACIÓN brindará la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de las actividades de la primera etapa de implantación, de forma tal que el S.T.J. cuente con el apoyo necesario para lanzar EL PROGRAMA en su jurisdicción. Esta primera etapa tiene por objeto el establecimiento de compromisos de servicio, formalizados a través de la CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE LA PATAGONIA ARGENTINA ANTE LA JUSTICIA", incluida en el acta convenio suscripta entre las partes en PUERTO MADRYN (CH) el pasado 8 de noviembre de 2002, ya agregado formando parte del presente en carácter de ANEXO "B" (Acordada nro. 103/02 del S.T.J.).

CLÁUSULA SEXTA: La duración y modalidades de la asistencia técnica a cargo de la UNIDAD DE COOPERACIÓN, será establecida de acuerdo con las actividades comprendidas en el Plan de Implantación mencionado en la Cláusula Quinta, la cual no podrá exceder de SEIS (6) meses, salvo justificadas razones que serán analizadas por las partes convinientes.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El responsable del S.T.J. se reunirá como mínimo, una vez al mes, con el titular de la UNIDAD DE COOPERACIÓN a los efectos de analizar la marcha del proceso de implantación de EL PROGRAMA.

CLÁUSULA OCTAVA: Los gastos que demande la implantación de EL PROGRAMA serán atendidos por el S.T.J. a excepción de la remuneración, viáticos y/o compensaciones que le correspondan al personal de LA UNIDAD DE COOPERACIÓN, los que serán atendidos por la SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN.

CLÁUSULA NOVENA: Las partes podrán rescindir las cláusulas referidas a la asistencia técnica a cargo de LA UNIDAD DE COOPERACIÓN del presente convenio, notificando fehacientemente a la contraparte con una anticipación no menor a UN (1) mes.

CLÁUSULA DÉCIMA: En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Víctor Hugo Soderó Nievas, Juez - Superior Tribunal de Justicia – Alfredo N. Atanasof, Jefe de Gabinete de Ministros.

ANEXO A

ACTA CONVENIO

En Puerto Madryn, Provincia del Chubut, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dos, entre la Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación, representada para este acto por el señor Jefe del Gabinete de Ministros, don ALFREDO ATANASOF, por una parte la "Jefatura de Gabinete", y por otra el "Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia" (órgano del Estatuto del Tratado Fundacional de la Región Patagónica del 26-6-1996), representado por el señor Presidente, Dr. LUIS ALFREDO LUTZ, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y el Vicepresidente Dr. JOSE LUIS PASUTTI, Ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut en adelante "el Foro Patagónico" se conviene:

1.- Las partes expresan la común voluntad de elaborar, ejecutar y desarrollar un programa de modernización del Estado para el sector justicia de los Poderes Judiciales de las Provincias que expresamente adhieran, a través de la cooperación y asistencia técnica del Estado Nacional por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y los organismos competentes que del mismo dependen.

2.- El programa comprenderá los siguientes proyectos: a) Carta compromiso para los derechos del ciudadano patagónico ante la justicia, en el marco del Decreto n° 229/00 del Superior Gobierno de la Nación; b) Organización y racionalización de las oficinas judiciales, estándares de rendimiento; c) Informatización de la gestión judicial, Infraestructura, equipamiento y capacitación continua. d) Comunicaciones electrónicas interjurisdiccionales. Firma digital.

3.- Los proyectos serán elaborados en conjunto entre la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Foro Patagónico para ser ejecutados en cada uno de los Poderes Judiciales de las Provincias de la Patagonia, según lo acepten previa y específicamente a través de la respectiva Acordada de cada Superior Tribunal.

4.- La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, toma a su cargo proveer la cooperación y asistencia técnica en base a los modelos del servicio de justicia más avanzados del exterior e intercambio internacional, asignando a las jurisdicciones de las Provincias de la Patagonia adherentes al programa el carácter de experiencia piloto en la modernización del estado para el sector justicia.

5.- Las partes se comprometen a aportar un financiamiento concurrente y similar para el programa y sus proyectos que concerten.

6.- Créase el "COMITÉ DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL SECTOR JUSTICIA DE LA REGIÓN DE LA PATAGONIA", que estará integrado por tres Ministros de los Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias de la Patagonia que previa y expresamente hayan adherido al programa y dos funcionarios, uno de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el otro de uno de los Ministerios del Gobierno de la Nación, que tendrá por misión y funciones ser la autoridad de aplicación del Convenio, dirigir el programa, nominar y controlar en conjunto con cada provincia adherente a los responsables de los distintos proyectos y gestionar la asistencia técnica y financiera que sea menester con el esfuerzo compartido de las partes.

7.- El plazo del convenio será de tres años a partir del 1° de enero de 2003. Los miembros del "COMITÉ DEL PROGRAMA" serán designados por un año **antes del 15 de diciembre del año en curso**. La sede del programa será Comodoro Rivadavia (Chubut).

En prueba de conformidad, se suscriben cuatro ejemplares del mismo tenor y a un sólo efecto en la ciudad y fecha arriba indicadas.

FIRMANTES:

ATANASOFF - LUTZ - PASUTTI.

En mi carácter de Presidente del "FORO PATAGÓNICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA", CERTIFICO que la presente es Copia fotostática fiel del Acta-convenio suscripto en PUERTO MADRYN (CH) el 8-11-2002 con la JEFATURA DEL GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN.- CONSTE. VIEDMA (RN), 14 de diciembre de 2002.

FIRMANTE:

LUTZ.

ANEXO B

ANEXO 2

CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE LA PATAGONIA ARGENTINA ANTE LA JUSTICIA

PREÁMBULO

Ya ingresados al siglo XXI los argentinos que viven en la Patagonia demandan con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.

Un proyecto tan ambicioso sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todos los sectores vinculados a la Administración de Justicia, con la colaboración de las fuerzas políticas, sociales y culturales que aseguren la unidad y continuidad de los esfuerzos y garanticen el consenso sobre las bases del funcionamiento de los Poderes Judiciales de las Provincias de la Patagonia que suscribieron el "TRATADO FUNDACIONAL" del 26 de junio de 1996.

Se hace necesario con ese objeto y finalidad y en ese marco, instrumentar en cada Provincia un "Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia".

El "FORO PATAGÓNICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA", considera necesario instituir una "Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia", y recomendar su adopción a cada uno de los Tribunales que lo integran, que:

- a) Atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada.
- b) Establezca los derechos de los usuarios de la Justicia.

Con la finalidad de conseguir una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos, la Carta desarrolla:

- En su primera parte los principios de transparencia, información y atención adecuada a contemplar en el "Pacto de Estado" de cada jurisdicción provincial, destacando la importancia de conseguir una Administración de Justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera lugar.
- En la segunda parte se centra en la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos. En primer lugar, la víctima del delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica y de género. En segundo término, los menores de edad, para evitar que se vea afectado su correcto desarrollo evolutivo. En tercer lugar las personas que sufran una discapacidad sensorial, física o psíquica, para superar sus problemas de comunicación y acceso a los edificios judiciales. Finalmente, a los miembros de las comunidades indígenas y a los extranjeros inmigrantes en la Patagonia argentina a quienes se debe asegurar la aplicación de los principios y derechos recogidos en la Constitución Nacional y de las Provincias de la Patagonia.
- En la tercera parte se ocupa en su tercera parte de aquellos derechos que son característicos de la relación del ciudadano con los Abogados y Procuradores, con la participación de los Colegios de Abogados de cada una de las Provincias de la Patagonia
- A modo de conclusión, una previsión relativa a las condiciones necesarias para su eficacia. De este modo, se recomienda adoptar los recaudos para la exigibilidad de los derechos reconocidos y la vinculación a los mismos de Jueces, Fiscales, Defensores Oficiales, Asesores de Menores, Secretarios, demás Funcionarios Judiciales, Abogados, Procuradores y otras personas e Instituciones que participan y cooperan con la Administración de Justicia en cada uno de los Poderes Judiciales de las Provincias de la Patagonia.

A los efectos de la Carta, se entienden por ciudadanos a quienes tengan residencia legal y efectiva en las jurisdicciones de las Provincias que suscribieron el "TRATADO FUNDACIONAL DE LA REGIÓN DE LA PATAGONIA" del 26 de junio de 1996.

I. UNA JUSTICIA MODERNA Y ABIERTA A LOS CIUDADANOS.

Una justicia transparente.

1.- El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales.

- Se propicia la creación y dotación material de Oficinas de Atención al Ciudadano, asegurando su implantación en todo el territorio de cada Provincia y de la región de la Patagonia.
- La información sobre los horarios de atención al público se situará en un lugar claramente visible en las sedes de los órganos jurisdiccionales.

2.- El ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de cada uno de los Poderes Judiciales de las Provincias de la Patagonia.

3.- El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes argentinas, de su respectiva Provincia, los Tratados y Convenciones internacionales incorporados por la reforma constitucional de 1994, de las restantes Provincias de la Patagonia y de los países que integran el MERCOSUR, mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible.

4.- El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tenga interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales.

- Los interesados tendrán acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado.
- Las autoridades y funcionarios expondrán por escrito al ciudadano que lo solicite los motivos por los que se deniega el acceso a una información de carácter procesal.

Una justicia comprensible.

5.- El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.

6.- El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los justiciables que no sean especialistas en derecho.

- Los Jueces y Funcionarios Judiciales que dirijan los actos procesales velarán por la salvaguardia de este derecho.

7.- El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

- Se deberá facilitar especialmente el ejercicio de estos derechos en aquellos procedimientos en los que no sea obligatoria la intervención de Abogado y Procurador.

8.- El ciudadano tiene derecho a disponer gratuitamente de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

Una justicia atenta con el ciudadano.

9.- El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales.

10.- El ciudadano tiene derecho a exigir que las actuaciones judiciales en las que resulte preceptiva su comparecencia se celebren con la máxima puntualidad.

- El Juez o el Secretario Judicial deberá informar al ciudadano sobre las razones del retraso o de la suspensión de cualquier actuación procesal a la que estuviera convocado.
- La suspensión se comunicará al ciudadano, salvo causa de fuerza mayor, con antelación suficiente para evitar su desplazamiento.

11.- El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible.

- La comparecencia de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales solamente podrá ser exigida cuando sea estrictamente indispensable conforme a la Ley.
- Se procurará siempre concentrar en un solo día las distintas actuaciones que exijan la comparecencia de una persona ante un mismo órgano judicial.
- Se tramitarán con preferencia y máxima celeridad las indemnizaciones o compensaciones económicas que corresponda percibir al ciudadano por los desplazamientos para acudir a una actuación judicial.
- Las dependencias judiciales accesibles al público, tales como zonas de espera, salas de vistas o despachos médico-forenses, deberán reunir las condiciones y servicios necesarios para asegurar una correcta atención al ciudadano.

12.- El ciudadano tiene derecho a ser adecuadamente protegido cuando declare como testigo o colabore de cualquier otra forma con la Administración de Justicia.

13.- El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atiende, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales.

- Los datos figurarán en un lugar fácilmente visible del puesto de trabajo.
- Quien responda por teléfono o quien realice una comunicación por vía telemática deberá en todo caso identificarse ante el ciudadano.

14.- El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el Juez o por el Secretario del tribunal respecto a cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial.

- Las declaraciones y testimonios, los juicios y vistas, así como las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución, se celebrarán siempre con presencia de Juez o Tribunal de acuerdo con lo previsto en las leyes.

15.- El ciudadano tiene derecho a ser atendido en horario de mañana y tarde en las dependencias de judiciales de aquellos órganos en los que, por su naturaleza o volumen de asuntos, resulte necesario y en los términos legalmente previstos.

16.- El ciudadano tiene derecho a ser atendido en los términos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y as Constituciones de la Provincia y de la Nación y las disposiciones del "TRATADO FUNDACIONAL" del 26 de junio de 1996.-

Una justicia responsable ante el ciudadano.

17.- El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como a recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso y si no hay fijado otro menor, dentro del plazo de un mes.

- Podrá presentar las quejas y sugerencias ante el propio Juzgado o Tribunal, sus órganos de gobierno de cada Poder Judicial, las Oficinas de Atención al Ciudadano o el Consejo de la Magistratura de la respectiva Provincia.
- Las áreas competentes de informatización de cada Poder Judicial, implantarán sistemas para garantizar el ejercicio de este derecho por vía telemática.
- En todas las dependencias de la Administración de Justicia de las Provincias de la Patagonia estarán a disposición del ciudadano, en lugar visible y suficientemente indicado, los formularios necesarios para ejercer este derecho.

18.- El ciudadano tiene derecho a exigir responsabilidades por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia de las Provincias de la Patagonia.-

- Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos de los ciudadanos darán lugar a una indemnización que podrá ser reclamada por el perjudicado con arreglo a lo dispuesto en la ley.
- Las reclamaciones indemnizatorias se tramitarán con preferencia y celeridad.

Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada.

19.- El ciudadano tiene derecho a una tramitación ágil de los asuntos que le afecten, que deberán resolverse dentro del plazo legal, y a conocer, en su caso, el motivo concreto del retraso.

- Cada Poder Judicial elaborará un programa de previsiones con la duración debida de los distintos procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales, al cual se dará una amplia difusión pública.

20.- El ciudadano tiene derecho a que no se le exija la aportación de documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, salvo que las leyes procesales expresamente lo requieran.

21.- El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la Administración de Justicia a través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales.

- Los Poderes Judiciales de cada una de las Provincias de la Patagonia impulsarán el empleo y aplicación de estos medios en el desarrollo de la actividad de la Administración de Justicia así como en las relaciones de ésta con los ciudadanos.
- Los documentos emitidos por los órganos de la Administración de Justicia y por los particulares a través de medios electrónicos y telemáticos, en soportes de cualquier naturaleza, tendrán plena validez y eficacia siempre que quede acreditada su integridad y autenticidad de conformidad con los requisitos exigidos en las leyes.

II. UNA JUSTICIA QUE PROTEGE A LOS MÁS DÉBILES

Protección de las víctimas del delito.

22.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser informado con claridad sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido, así como sobre el curso del proceso.

- Se asegurará que la víctima tenga un conocimiento efectivo de aquellas resoluciones que afecten a su seguridad, sobre todo en los casos de violencia dentro de la familia.
- Se potenciarán los cometidos de las Oficinas de Atención a la Víctima y se ampliarán sus funciones buscando un servicio integral al ciudadano afectado por el delito, asegurando que presten servicio en todo el territorio de la región de la Patagonia.

23.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a que su comparecencia personal ante un Juzgado o Tribunal tenga lugar de forma adecuada a su dignidad y preservando su intimidad.

- Se adoptarán las medidas necesarias para que la víctima no coincida con el agresor cuando ambos se encuentren en dependencias judiciales a la espera de la práctica de cualquier actuación procesal.
- Las autoridades y funcionarios velarán especialmente por la eficacia de este derecho en los supuestos de violencia doméstica o de género, otorgando a las víctimas el amparo que necesiten ante la situación por la que atraviesan.

24.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido de forma inmediata y efectiva por los Juzgados y Tribunales, especialmente frente al que ejerce violencia física o psíquica en el ámbito familiar.

- Se facilitará el uso de aquellos medios técnicos que resulten necesarios para la debida protección de la víctima, tales como los instrumentos de localización de personas, los mecanismos de teleasistencia y otros similares.

25.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones judiciales.

- Los Jueces y Magistrados, así como el Ministerio Fiscal, velarán por el adecuado ejercicio de este derecho.

Protección de los menores.

26.- El menor de edad tiene derecho a que su comparecencia ante los órganos judiciales tenga lugar de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo.

- Para el cumplimiento de este derecho podrán utilizarse elementos técnicos tales como circuitos cerrados de televisión, videoconferencia o similares.
- Se procurará evitar la reiteración de las comparecencias del menor ante los órganos de la Administración de Justicia.

27.- El menor de edad que tuviere suficiente juicio tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social, así como a que las distintas actuaciones judiciales se practiquen en condiciones que garanticen la comprensión de su contenido.

- El Ministerio Fiscal velará por la efectividad de este derecho, prestando al menor la asistencia que necesite.

28.- El menor de edad tiene derecho a que las autoridades y funcionarios de la Administración de Justicia guarden la debida reserva sobre las actuaciones relacionadas con ellos, que en todo caso deberán practicarse de manera que se preserve su intimidad y el derecho a su propia imagen.

Protección de los discapacitados.

29.- El ciudadano afectado por cualquier tipo de discapacidad sensorial, física o psíquica, podrá ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en esta Carta y en las leyes procesales.

- Solamente deberá comparecer ante el órgano judicial cuando resulte estrictamente necesario conforme a la Ley.
- Los edificios judiciales deberán estar provistos de aquellos servicios auxiliares que faciliten el acceso y la estancia en los mismos.

30.- El ciudadano sordo, mudo, así como el que sufra discapacidad visual o ceguera, tiene derecho a la utilización de un intérprete de signos o de aquellos medios tecnológicos que permitan tanto obtener de forma comprensible la información solicitada, como la práctica adecuada de los actos de comunicación y otras actuaciones procesales en las que participen.

- Se promoverá el uso de medios técnicos tales como videotextos, teléfonos de texto, sistema de traducción de documentos a braille, grabación sonora o similares.
- Se comprobará con especial cuidado que el acto de comunicación ha llegado a conocimiento efectivo de su destinatario y, en su caso, se procederá a la lectura en voz alta del contenido del acto.

Los derechos de las comunidades originarias ("indígenas").

31.- El ciudadano de las comunidades originarias (o "indígenas"), nativas, enraizadas o afincadas en la región de la Patagonia con reconocimiento de sus derechos de preexistencia étnica y cultural según la reforma constitucional de 1994, en especial a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y a la entrega de otras tierras aptas para su desarrollo, tiene derecho a ser atendido por todos los que prestan sus servicios en la Administración de Justicia de acuerdo con lo establecido en esta Carta, con las garantías de la Constitución Nacional y de la respectiva Provincia, sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua, religión o creencias, particularmente cuando se trate de menores de edad y conforme a lo dispuesto por los Tratados y convenios internacionales suscriptos y ratificados por la República Argentina y las Provincias de la Patagonia.

- Se garantizará el uso de intérprete cuando el ciudadano indígena que no conozca el castellano, hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución judicial que haga a sus derechos.

32.- Los ciudadanos indígenas en las Provincias de la Patagonia tienen derecho a recibir una protección adecuada de la Administración de Justicia con el objeto de asegurar que comprenden el significado y trascendencia jurídica de las actuaciones procesales en las que intervengan por cualquier causa.

- Los Jueces y Tribunales así como el Ministerio Fiscal velarán en todo momento por el cumplimiento de este derecho.
- La Administración de Justicia asegurará una atención propia de la plena condición de nacional de los ciudadanos de comunidades indígenas nacidos en el territorio de la República de conformidad a las disposiciones de la Constitución Nacional y de las Provincias de la Patagonia, los Tratados y convenciones internacionales ratificados por la República.

Los derechos de los extranjeros.- Los inmigrantes ante la justicia.

33.- El extranjero tiene derecho a ser atendido por todos los que prestan sus servicios en la Administración de Justicia de acuerdo con lo establecido en esta Carta, con las garantías de la Constitución Nacional y de la respectiva Provincia, sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua, religión o creencias, particularmente cuando se trate de menores de edad y conforme a lo dispuesto por los Tratados y convenios internacionales suscriptos y ratificados por la República Argentina y las Provincias de la Patagonia.

- Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero, en particular el inmigrante habitante de la Patagonia que no conozca el castellano, hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución judicial que haga a sus derechos.

34.- Los extranjeros, en particular los inmigrantes en las Provincias de la Patagonia tienen derecho a recibir una protección adecuada de la Administración de Justicia al objeto de asegurar que comprenden el significado y trascendencia jurídica de las actuaciones procesales en las que intervengan por cualquier causa.

- Los Jueces y Tribunales así como el Ministerio Fiscal velarán en todo momento por el cumplimiento de este derecho.

III. UNA RELACIÓN DE CONFIANZA CON ABOGADOS Y PROCURADORES.

Una conducta deontológicamente correcta.

35.- El ciudadano tiene derecho a la prestación de un servicio profesional de calidad por parte del Abogado en el cumplimiento de la misión de defensa que le encomiende, así como por el Procurador en la representación de sus intereses ante los órganos jurisdiccionales. Los Colegios de Abogados colaborarán con los respectivos Poderes Judiciales en la promoción y contralor del cumplimiento de esta regla.

36.- El ciudadano tiene derecho a denunciar ante los Colegios de Abogados las conductas contrarias a la deontología profesional y a conocer a través de una resolución suficientemente motivada el resultado de la denuncia.

37.- El ciudadano tiene derecho a conocer, a través del Colegio de Abogados correspondiente, si un Abogado o Procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria, no cancelada, por alguna actuación profesional.

- Los Colegios respectivos establecerán un sistema para que el ciudadano pueda conocer de forma efectiva las sanciones disciplinarias, no canceladas, impuestas a un profesional en todo el territorio nacional.

38.- El ciudadano tiene derecho a que los profesionales que le representen, asesoren o defiendan guarden riguroso secreto de cuanto les revelen o confíen en el ejercicio de estas funciones.

Un cliente informado.

39.- El ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado de la intervención del profesional elegido y la forma de pago.

- Los Abogados y Procuradores estarán obligados a entregar a su cliente un presupuesto previo que contenga los anteriores extremos. A estos efectos se regulará adecuadamente y fomentará el uso de las hojas de encargo profesional, bajo fórmulas concertadas entre cada Poder Judicial y los Colegios de Abogados de la jurisdicción.
- El cliente podrá exigir a su Abogado o Procurador rendición de cuentas detalladas de los asuntos encomendados.

40.- El ciudadano tiene derecho a obtener del Abogado y Procurador información actualizada, precisa y detallada sobre el estado del procedimiento y de las resoluciones que se dicten.

- El profesional deberá entregar a su cliente copia de todos los escritos que presente y de todas las resoluciones judiciales relevantes que le sean notificadas.
- El ciudadano podrá consultar con su Abogado las consecuencias de toda actuación ante un órgano jurisdiccional.
- Se potenciarán los servicios de información, orientación jurídica y contralor, dependientes de los Colegios de Abogados, que ampliarán sus funciones para informar al ciudadano sobre sus derechos en la relación de confianza con su Abogado.

41.- El ciudadano tiene derecho a ser informado por su Abogado y por su Procurador, con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial, sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuantía estimada.

- Los respectivos Colegios de Abogados elaborarán un estudio de previsiones sobre la cuantía media aproximada de las costas de cada proceso, dependiendo tanto del tipo de procedimiento como de su complejidad, que será actualizada periódicamente.

Una justicia gratuita de calidad.

42.- El ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente por un Abogado suficientemente cualificado y a ser representado por un Procurador cuando tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita.

- La autoridad responsable del Ministerio Público Pupilar y los Colegios respectivos velarán por el correcto desarrollo de su función por parte del profesional designado.

43.- El ciudadano tiene derecho a exigir una formación de calidad al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita.

- La autoridad responsable del Ministerio Público Tutelar y los Colegios de Abogados adoptarán las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de este derecho.

EFICACIA DE LA CARTA DE DERECHOS.

44.- Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en esta Carta. Estarán vinculados a ella Jueces, Fiscales, Defensores Oficiales, Asesores de Menores, Secretarios y demás Funcionarios Judiciales, médicos forenses, otros funcionarios públicos, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.

45.- El "FORO PATAGÓNICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA y los Superiores Tribunales, el Ministerio Público y los Consejos de la Magistratura de las Provincias de la Patagonia argentina que lo integran, con competencias en la materia, los Colegios o

Asociaciones de Magistrados y Funcionarios y los Colegios de Abogados adoptarán las disposiciones oportunas y proveerán los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos reconocidos en esta Carta.

44.- Cada uno de los Superiores Tribunales de las Provincias de la Patagonia, llevarán a cabo un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de esta Carta, a cuyo efecto será regularmente informado al "FORO PATAGÓNICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA" para difusión a los demás Órganos del Estado, Instituciones públicas, O.N.G. y a los que soliciten. Asimismo, se comprometen a incluir en la memoria anual elevada por cada Poder Judicial a la Legislatura de su Provincia, una referencia específica y suficientemente detallada de las quejas, reclamaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia.

FORO PATAGÓNICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA,
foropatagonicostjn@rnonline.com.ar .

(Acta-convenio del 8-11-02 suscripta en PUERTO MADRYN -CH- entre la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN y el FORO PATAGÓNICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA).

(Acordada nro. 103/02 del S.T.J. DE RÍO NEGRO)

ANEXO C

ACORDADA N° 103

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los **14 días del mes de noviembre de dos mil dos**, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y

CONSIDERANDO:

Que el día 8 de noviembre del cte. año se firmó un Acta Convenio entre el **“Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia”** y la **Jefatura de Ministros de la Nación**” a los fines de elaborar, ejecutar y desarrollar un Programa de modernización del estado para el sector de Justicia de los poderes Judiciales de las Provincias que expresamente adhieran, a través de la cooperación y asistencia técnica del Estado Nacional por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y los organismos componentes que del mismo dependen.

Que por lo tanto corresponde que este Poder Judicial adhiera expresamente al Convenio mencionado en el párrafo precedente.

Que asimismo resulta procedente adherir a los términos de la *“Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia”*, documento que fuera presentado en la ocasión de la reunión de la Comisión Directiva del Foro el día 7-11-02 en Puerto Madryn - Chubut.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:

1º) Adherir al Convenio suscripto entre el **“Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia y la Jefatura de Ministros de la Nación”**, que como anexo nro. I forma parte integrante de la presente.

2º) Adherir a los términos de la *“Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia”*, que como anexo nro. 2 forma parte integrante de la presente.

3º) Regístrese, comuníquese tómesese razón y oportunamente archívese.

Firmantes:

Lutz - Presidente STJ - Ballardini - Juez STJ - Sodero Nievas - Juez STJ.

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2002.

VISTO el ACTA CONVENIO suscripta el 8 de noviembre de 2002 entre la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el FORO PATAGÓNICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA, en Puerto Madryn, PROVINCIA DEL CHUBUT, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Acta citada en el Visto, las partes firmantes expresaron su voluntad de elaborar, ejecutar y desarrollar un PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL SECTOR JUSTICIA DE LA REGIÓN DE LA PATAGONIA a cargo de los Poderes Judiciales de las Provincias de TIERRA DEL FUEGO; de SANTA CRUZ; del CHUBUT; del RÍO NEGRO; del NEUQUÉN y de LA PAMPA.

Que dicho Programa contará con la cooperación y asistencia técnica del Estado Nacional, por conducto de esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y los organismos competentes que de la misma dependen.

Que en orden a la importancia de los objetivos plasmados en el Acta Convenio en cuestión y con el objeto de concretar la asistencia aludida en el considerando anterior, resulta necesario encomendar la representación de esta Jurisdicción en el PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL SECTOR JUSTICIA DE LA REGIÓN PATAGÓNICA.

Que el dictado de la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8° del Decreto N° 977/95.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébase el ACTA CONVENIO suscripta el 8 de noviembre de 2002 en la ciudad de Puerto Madryn, PROVINCIA DEL CHUBUT, entre la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el FORO PATAGÓNICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA, la que en copia certificada se adjunta formando parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2°.- Encomiéndase la representación de esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en el COMITÉ DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL SECTOR JUSTICIA DE LA REGIÓN PATAGONIA al Doctor Don Marcos Luis BOTBOL (L.E. N° 5.098.326).

ARTICULO 3°.- Encomiéndanse la representación alterna y las tareas de asesoramiento al profesional citado en el artículo anterior, a los Doctores Doña Oriana Laura SÁENZ (D.N.I. N° 23.829.088) y Don Luis Alberto ORREGO (L.E. N° 5.161.750), quienes tendrán a su cargo la coordinación general de las tareas que para la elaboración del PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL SECTOR JUSTICIA DE LA REGIÓN PATAGONIA desarrollen los organismos dependientes de esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTICULO 4°.- Las actividades encomendadas a los profesionales mencionados en los artículos anteriores serán ejercidas en el marco de las tareas comprendidas en el objeto de sus respectivos contratos y designaciones, según el caso, en el ámbito de esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, no irrogando aquellas erogación presupuestaria alguna.

ARTICULO 5°.- La representación de esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS establecerá las pautas operativas tendientes al ordenamiento, dictado, consenso y logro de los objetivos definidos en el ACTA CONVENIO que, como ANEXO I, es parte integrante de la presente resolución.

Asimismo, la representación deberá elevar al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, cada NOVENTA (90) días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, un informe que contenga el estado de avance y demás consideraciones y/o recomendaciones relativas a las actividades confiadas.

ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 281

Alfredo N. Atanasof, Jefe de Gabinete de Ministros.